

## **Intervención en emergencias: la dimensión psicopolítica**

Mireya Lozada

mireyaloz@gmail.com

Universidad Central de Venezuela, Instituto de Psicología

### **Resumen**

En los años 1999, 2005, 2008 y 2010 intensas y continuas lluvias provocaron situaciones de emergencia en Venezuela, que generaron profundas secuelas a nivel individual y colectivo. En esas situaciones se desarrolló una gran cantidad de programas de ayuda a la población afectada. Una buena parte de dichos programas estuvo dirigida a atender las consecuencias del impacto de la emergencia. En la evaluación de estos programas, especialmente aquellos dirigidos al apoyo psicológico, desarrollados por grupos nacionales e internacionales durante y después de las emergencias, destacan algunas problemáticas y desafíos que merecen ser analizados. El artículo recoge dichas consideraciones, con énfasis en una perspectiva psicopolítica en cinco ejes: intervención psicosocial en emergencias: ¿intervencionismo o empoderamiento?; ayuda humanitaria y organismos multinacionales; evaluación de recursos y programas; desastres y opinión pública; y reconstrucción y prevención: el desafío ético-político.

**Palabras clave:** emergencias, apoyo psicológico en desastres, intervención psicosocial en emergencias

Recibido: 31 de enero de 2012

Aprobado: 04 de mayo de 2012

## **Intervention in emergencies: Psychopolitical dimension**

### **Abstract**

In 1999, 2005, 2008 and 2010 intense and long lasting rains provoked emergency situations in Venezuela that generated individual and collective serious consequences. A lot of support programs for the affected people were developed in these situations. A great deal of such programs was directed to attend the consequences of the impact of the emergency. In the evaluation of these programs, especially those addressed to psychological support, developed by national and international groups during and after the emergencies, some problems and challenges that deserved to be analyzed stand out. This article includes such considerations emphasizing a psycho-political perspective in five themes: psychosocial intervention in emergencies: ¿interventionism or empowerment?, humanitarian help and multinational organisms, evaluation of resources and programs, disasters and public opinion and reconstruction and prevention: the ethic-political challenge.

**Key words:** emergencies, psychological support in disasters, psychosocial intervention in emergencies

## INTRODUCCIÓN

Intensas y continuas lluvias durante el mes de diciembre de 1999 provocaron el desastre natural de mayores proporciones en la historia de Venezuela. Varias regiones del país fueron afectadas, provocando miles de damnificados y muertos, la destrucción masiva de comunidades, de infraestructura y vialidad, y la fragmentación o desaparición de redes de apoyo familiares, laborales y comunitarias. En los años 2005, 2008 y 2010, nuevamente, el impacto de las lluvias generó profundas secuelas a nivel individual y colectivo en nuestro país.

Buena parte de los programas de ayuda a las poblaciones afectadas en estas emergencias estuvieron dirigidos a atender las consecuencias de su impacto. Una mirada crítica a la labor desarrollada por estos programas, desarrollados por grupos nacionales e internacionales durante y después de los distintos eventos, incluyendo nuestra propia experiencia en el marco de las acciones adelantadas por la RAP (Red de Apoyo Psicológico UCV), destacan algunos aspectos de los programas de apoyo psicológico en emergencias, que requieren ser problematizados. Con énfasis en una perspectiva psicopolítica, hemos agrupado dichas consideraciones en cinco ejes problemáticos: 1. intervención psicosocial en emergencias: ¿intervencionismo o empoderamiento?; 2. ayuda humanitaria y organismos multinacionales; 3. evaluación de recursos y programas; 4. desastres y opinión pública, y 5. reconstrucción y prevención: el desafío ético-político. La agrupación se ha hecho únicamente con fines analíticos, pues la dinámica y complejidad de los procesos implicados no puede ser comprendida en forma fragmentada.

### INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN EMERGENCIAS: ¿INTERVENCIONISMO O EMPODERAMIENTO?

Una tendencia dominante en los programas adelantados por organizaciones humanitarias de ayuda internacional y por profesionales de psicología, ha consistido en el desarrollo de acciones terapéuticas basadas en la adopción de categorías clínicas (p. e.: PTSD: *post-traumatic stress disorder*) que pretenden identificar y atender una respuesta traumática universal luego de la exposición a eventos extremadamente negativos.

Este tipo de abordaje considera a los afectados como víctimas de trastornos psicológicos, obviando la naturaleza colectiva de la experiencia. En este sentido, el desastre es concebido como una emergencia de salud

mental, desconociendo tanto la complejidad de la situación, la cual abarca todos los ámbitos de la vida de las personas y grupos que tienen una historia cultural, social y personal previa, en la que se ubican las graves pérdidas materiales, sociales y culturales sufridas, como el significado social del daño.

Al centrarse en los estados “internos” y reducir los procesos psicosociales a síntomas, se niegan las realidades históricas culturales y políticas, reconociendo el “trauma” en las características funcionales u orgánicas de cada individuo. Este enfoque, basado en el modelo médico, con énfasis biológico e individual, unifica experiencias traumáticas de distinta índole: guerras, desastres naturales, violencia política, y desconoce las particularidades del contexto donde se expresan las profundas desigualdades socioeconómicas, que son el origen de muchas de las catástrofes colectivas. Así, se aborda desde una perspectiva técnica lo que constituye en muchas ocasiones un problema político o estructural.

La medicalización del sufrimiento limita la experiencia de la gente a un problema médico, descontextualizado de los contextos sociales, de la implicación personal y colectiva en que se inscriben los procesos de duelo por pérdidas humanas, simbólicas y materiales.

Más que profundizar en el cuestionamiento a este enfoque (Steinglass y Gerrity, 1990; Summerfield y Hume, 1993; Gist, Lubin y Redbum, 1999), interesa destacar cómo este tipo de acción psicológica privilegia la acción técnica e impone modelos de intervención que desconocen las posibilidades de las poblaciones afectadas y sus recursos para enfrentar estas situaciones, desde una visión que las coloca como víctimas pasivas de un sufrimiento, como pacientes antes que ciudadanos. Los procesos de victimización o patologización de las poblaciones afectadas por las emergencias desconocen las capacidades participativas de las poblaciones afectadas y contribuyen a reforzar categorías diagnósticas, que etiquetan o culpabilizan a los afectados en patrones que van desde expresiones depresivas o disociaciones, hasta comportamientos de pasividad o dependencia.

A pesar del énfasis patologizante en la mayoría de programas de atención psicológica en emergencias, algunas investigaciones demuestran que los sobrevivientes de desastres en general no suelen utilizar voluntariamente los servicios psicológicos y de salud mental. Los afectados prefieren recibir o buscar tipos de ayuda que permitan resolver sus necesidades inmediatas. En este sentido, el personal de salud mental que apoya a las víctimas

debería dirigir sus esfuerzos a reconstruir las redes sociales y el sentido de comunidad en los grupos afectados, pues aun cuando la mayoría de los desastres tiende a ser súbitos e inevitables, las personas despliegan roles de liderazgo y acciones de apoyo mutuo, alcanzándose altísimos niveles de afrontamiento de parte de los afectados, las cuales en general son ignorados por los organismos que brindan ayuda.

De allí la importancia que los programas de intervención psicosocial en catástrofes consideren, junto con la claridad en los criterios éticos y la equidad de las acciones, la participación de las poblaciones afectadas en la definición, ejecución y evaluación de los proyectos emprendidos, que favorezcan la construcción de ciudadanía, profundización de la democracia y la defensa de los derechos humanos en las acciones de reconstrucción que se emprenden. Esta reivindicación de una aproximación psicosocial debería, igualmente, favorecer una revisión de las distintas concepciones de lo *psicosocial*, visión difusa y ampliamente difundida, que manejan los diferentes programas de apoyo en emergencias. Se trataría de reivindicar una visión que trascienda la dicotomía individuo-sociedad y que ofrezca una visión integradora y participativa que permita superar esta concepción dualista, y abordar sujeto y sociedad como partes de un mismo proceso, donde ambas realidades se integran y constituyen mutuamente.

### **AYUDA HUMANITARIA Y ORGANISMOS MULTINACIONALES**

La implicación de la industria de salud mental como respuesta a los desastres está lejos de la visión en la que los psicólogos recurren a sus conocimientos del comportamiento humano y respuestas sociales, para apoyar a las comunidades en la reconstrucción de sus vidas. “En los recientes desastres a gran escala se han encontrado comunidades literalmente sitiadas por asesores y asesores potenciales, pregonando su servicio a cualquiera que, incluso, se encuentre tangencialmente conectado con la circunstancia o evento” (Gist, Lubin y Redburn, 1999, p. 3).

Frente a distintos tipos de catástrofes colectivas, hemos visto crecer el número de proyectos de apoyo psicosocial de agencias multinacionales de ayuda humanitaria en países del Tercer Mundo. Los criterios utilizados por estas agencias en la política de contratos con organismos locales, los principios y los modelos de abordaje individual utilizados, tienen profundas consecuencias, tanto en la recuperación de los afectados y la continuidad de las acciones como en el fortalecimiento o destrucción de redes sociales

existentes en las poblaciones a las que se brinda ayuda. Amparados en la supuesta eficacia de la acción, se esconde el fracaso de muchas intervenciones (falta de continuidad, ausencia de evaluación del impacto, apoyo condicionado al tipo de oferta en lugar de las necesidades, etc.).

En los últimos años han proliferado distintos programas de intervención y tratamiento hiperespecíficos y sofisticados, de cuestionable impacto y propósitos diversos: grupos que previenen el estrés postraumático en trabajadores, redes de salud mental en desastres, circuitos de conferencias, así como cantidad de productos y proveedores potenciales, mercadeo de patentes y franquicias de remedios y publicaciones comerciales. La expansión de técnicas, productos y vendedores se desplaza paralelamente a la proliferación de diagnosis que pregonan prevenir, paliar o “curar” los *traumas*.

Lo *humanitario* se ha convertido en noticia y los cooperantes en personajes de actualidad, que reciben demandas de la opinión pública e intereses políticos de países o agencias transnacionales. La confusión entre intereses militares, políticos y humanitarios se refleja en programas de actores individuales o institucionales. Así, se justifica la intervención militar o la utilización de la ayuda humanitaria con fines políticos. Algunos autores, Martín-Beristain (2000), Kaniasty y Norris (1999) y Kilijanek y Drabek (1979) subrayan algunas tendencias y contradicciones en la ayuda humanitaria. Veamos cómo ellas se expresan en Venezuela y el mundo.

#### LA CONFUSIÓN ENTRE LO HUMANITARIO Y LO POLÍTICO

Martín-Beristain (2000) destaca como hecho conocido la utilización de la ayuda humanitaria para justificar objetivos políticos de parte de diferentes Estados y agencias multinacionales. Por ejemplo, el bombardeo de Serbia (mayo-junio de 1999) se vendió en Europa como una “guerra humanitaria”, pero los cinco mil muertos por las armas químicas en Irak en los años ochenta no fueron una prioridad política hasta que Sadam Hussein se convirtió en problema para Estados Unidos.

Igualmente, es notoria tanto la confrontación de intereses civiles y militares en el manejo de las emergencias como la utilización política del sufrimiento de las víctimas y sus familiares. En nuestro país, las tensiones y conflictos generados por la confrontación de intereses políticos en el estado Vargas, en pleno período electoral para el momento de la tragedia de 1999 y las consecuencias de la polarización social que ha enfrentado el

país, limitaron en 2005, 2008 y 2010 las iniciativas de ayuda de algunos sectores y la acción de grupos e instituciones en la búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas por la emergencia. Estas dificultades se agudizaron en la evidente falta de coordinación entre los distintos institutos gubernamentales (gubernaciones, alcaldías, Protección Civil, etc.), y entre estos y las organizaciones no gubernamentales que ofrecieron apoyo o asumieron proyectos específicos en las zonas atendidas. Además de las diferencias entre principios, objetivos, plazos y recursos de los distintos programas, también se evidenció la confrontación por el afán de protagonismo, autoritarismo, búsqueda de reconocimiento oficial, competencias políticas y territoriales de los distintos actores y organismos que manejaron las emergencias.

En fin, en los desastres se visibilizaron conflictos latentes y manifiestos intragobierno y/o entre organizaciones estatales y sociales, entre Gobierno nacional y regional, entre oficialismo y oposición, entre civiles y militares.

#### LA MILITARIZACIÓN DE LA AYUDA

En forma creciente los ejércitos del mundo se “convierten” en ONG, construyen campamentos de refugiados y deciden las acciones y programas a desarrollar. La ayuda humanitaria se utiliza como argumento para legitimar el papel de los ejércitos en conflictos internacionales y en situaciones de catástrofes colectivas. Las campañas de reclutamiento, los desfiles militares en Europa, aparecen vinculados a la ayuda humanitaria: “los ejércitos que han estado en Kosovo, Bosnia, etc.”. De esta manera, se justifica el rol de los ejércitos y el comercio de armas, el incremento de guerras y pobreza en muchos países del Tercer Mundo, legitimándose así determinados actores políticos o militares a nivel mundial.

Adicionalmente, a nivel local se expresa otra forma de militarización de la ayuda. Al asumir el sector militar la responsabilidad del control de los albergues o refugios, como ocurrió en algunos refugios durante las emergencias en Venezuela, estos se convierten en regimientos o cuarteles, donde se violentan o niegan los derechos de la población afectada, al establecerse bajo criterios más o menos autoritarios, estrictos y rígidos mecanismos de regulación-control de seguridad, permanencia y acceso a servicios (alimentación, salud, recreación, trabajo, etc.), limitándose tanto la libertad y autonomía como la participación de las personas afectadas en el manejo de su cotidianidad, en la definición y seguimiento de los programas de apoyo.

## AYUDA HUMANITARIA: TECNICISMO Y BREVEDAD

Un tercer aspecto a considerar son los criterios temporales y organizativos que rigen la ayuda humanitaria. Luego de la intensa movilización de recursos y personal de estos programas en el momento de la emergencia y del despliegue de una acción focal y puntual, y en muchas ocasiones sin incidencia real en las poblaciones afectadas, las organizaciones se retiran generando consecuencias en términos de la continuidad de la ayuda, pérdida del foco de atención sobre esas comunidades, fragmentación o desaparición de las organizaciones existentes previamente, entre otras.

Las instituciones donantes tienen una cultura organizativa, cuya política es favorecer la profesionalización de los trabajadores de ayuda humanitaria y tratan que su personal permanezca poco tiempo (máximo dos meses) en los países, a objeto de evitar que se establezcan lazos con la gente local.

Esta acción puntual, de claros límites temporales, también es asumida por muchas de las instituciones estatales que brindan ayuda, quienes se retiran, disminuyen el alcance de los programas y su evaluación una vez superada la fase crítica de la emergencia.

### EL MANEJO DE LOS FONDOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA

El uso de los fondos es otro aspecto crítico, el cual compete con las necesidades de las poblaciones con las que se trabaja. En ocasiones las necesidades organizativas ocupan un alto porcentaje del presupuesto de los proyectos, quedando las demandas de los afectados subordinadas a este aspecto, o a la utilización de fondos en los proyectos económicos de los gobiernos que reciben o distribuyen la ayuda.

Muchas de las situaciones de amenaza, miedo y reexperimentación traumática en el estado Vargas, durante las lluvias del mes de febrero de 2005, se deben al incumplimiento de las promesas y fallas de los programas de reconstrucción y prevención que debieron ser puestos en marcha luego de la tragedia de 1999. Las acusaciones y denuncias de corrupción, o desvío de fondos nacionales e internacionales a otros programas o proyectos gubernamentales, son algunos de los reclamos escuchados en manifestaciones públicas o a través de los medios de comunicación, muchos de los cuales utilizan políticamente estas denuncias de los afectados.

Otro aspecto a atender en el plano económico es el impacto local que tiene la ayuda nacional o internacional, al aumentar el costo de la vida de la zona o generar dependencia de las comunidades a estas agencias, además de las inequidades en la distribución de dicha ayuda.

Después de una catástrofe, los evidentes signos de apoyo material y social podrían brindar la falsa imagen de que todas las víctimas reciben equitativamente la ayuda. Sin embargo, esta visión de “democracia del desastre común” (Kaniasty y Norris, 1999) no se ajusta a una distribución azarosa o equitativa de las ayudas. Según los autores, las observaciones empíricas y los testimonios de las poblaciones sugieren que ciertas personas tienen una ventaja o desventaja relativa al recibir el apoyo, por ejemplo, aquellas que poseen redes sociales más amplias e incluso un estatus socioeconómico mayor.

Igualmente, investigaciones en comportamientos de ayuda posdesastre destacan la exclusión o limitaciones de esos beneficios de sectores pobres, de ancianos y de algunas minorías étnicas (negros, indios, etc.). Independientemente de sus orígenes, los desastres exponen vívidamente y aumentan las desigualdades sociales relacionadas con la etnicidad, la raza y el estatus socioeconómico.

Así mismo, es importante considerar el contexto de las comunidades de acogida en los casos de desplazamiento. Confrontarse con el sufrimiento de los damnificados puede promover conductas de acogida, pero en otras ocasiones puede existir rechazo, criminalización o competitividad por la vivienda, el trabajo, escolaridad, etc., o existir la percepción de que los afectados son mejor considerados por las organizaciones de ayuda que el resto de la población. La ayuda debería significar una mejora de la situación de los desplazados y de sus relaciones en el medio local. Así, debería facilitarse algún tipo de comunicación, beneficio o impacto positivo en las poblaciones de acogida.

Obviamente, esta desigualdad en la distribución de la ayuda no se corresponde únicamente con la inconsistencia de la “solidaridad comunitaria” o de los límites de “comunidad altruista”, sino también a conflictos raciales, étnicos, socioeconómicos existentes antes de la tragedia (Kaniasty y Norris, 1999), al manejo interesado de grupos, organizaciones y gobiernos nacionales y extranjeros, quienes obtienen beneficios políticos (votos, nuevos adherentes), financieros (aumento de presupuestos), estatus

(reconocimiento internacional), de la ayuda brindada a determinados tipos de población.

Por estas razones es cuestionable la propuesta pública de “volver las cosas a su estado inicial” como una opción viable porque para algunas víctimas esto quiere decir simplemente un regreso a su posición de desventaja y, en general, luego de los desastres naturales ocurridos en muchos países, en especial llamados del Tercer Mundo, no hay normalidad a la cual regresar. La normalidad es marcadamente crítica, pues una mayoría de la población vive regularmente en situación de emergencia social y las catástrofes no solo precipitan crisis y trastornos, sino que desnudan el carácter deshumanizador y alienante de una estructura injusta y desigual de relaciones sociales. Los programas dirigidos a la prevención del manejo de los posibles riesgos exigen una visión que considere las condiciones de injusticia social, marginalidad, exclusión y pobreza, que constituyen la “normalidad” de la vida cotidiana de la mayor parte de los países que sufren desastres. Las condiciones estructurales de orden socioeconómico y político son factores que determinan en buena parte de los países pobres los desastres naturales, los niveles de impacto y las posibilidades de reconstrucción individual y colectiva de los afectados.

### **EVALUACIÓN DE RECURSOS Y PROGRAMAS**

Otro de los aspectos más resaltantes en los programas de apoyo es el déficit de coordinación intra e interinstitucional. Los problemas de comunicación y difusión de la información a nivel interno y externo de las institucionales, dificulta la optimización de los recursos financieros, técnicos y humanos.

De igual forma, la falta de capacitación del personal de apoyo y la limitada preparación institucional para enfrentar la simultaneidad y diversidad de los cambios, constituyen problemáticas importantes a considerar en la evaluación de los programas.

En este sentido, en el análisis de los programas de reconstrucción se revela como prioritaria una evaluación de los proyectos de apoyo emprendidos por los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales. Ello conlleva ponderar, desde una visión holista y de contexto, la efectividad de la intervención, midiendo el impacto de cada programa a través de una valoración crítica, rigurosa y sistemática. Indiscutiblemente, esta evaluación permitirá formular propuestas de investigación que exploren en el mediano

y largo plazo las diversas implicaciones del proceso de intervención y el desarrollo de planes de capacitación y prevención (Rangel y Lozada, 2003).

La multiplicidad de variables que inciden en los sujetos, contextos y procesos implicados en los programas de intervención en emergencias, obliga a crear y fortalecer instancias mediadoras que tomen en cuenta estos factores y articulen la acción de los diferentes sectores participantes. La efectividad de tales programas y su incidencia sobre la población dependerá en gran medida del diálogo y la acción articulada de las instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que brindan apoyo. La integración y comunicación entre las diferentes instituciones y la población favorecerá los procesos de participación comunitaria, además de evitar la duplicación de esfuerzos y el aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos.

Obviamente, estas prioridades de coordinación e integración requieren de una clara definición de políticas públicas y de una estrategia de información y difusión interna y externa, que facilite la comunicación entre organismos estatales, otras instituciones y la población. El rol de los medios de comunicación es vital en este proceso.

## **DESASTRES Y OPINION PÚBLICA**

Luego del impacto de catástrofes colectivas de gran magnitud, brindar apoyo a los afectados, reconocer al otro, restaurar la verdad y la justicia forman parte de las necesidades psicosociales para reconstruir el tejido social.

El ámbito público es el espacio en el cual toma lugar buena parte del trabajo de reconstrucción de la memoria de lo ocurrido. Son los medios de comunicación social: televisión, películas, revistas, periódicos, radio, boletines y libros publicados por comunidades de investigación, sociedades profesionales y editoriales académicas, y los materiales producidos por agencias de servicios, instituciones educativas, fundaciones privadas y organizaciones religiosas, quienes recogen esta memoria. Igualmente, los relatos de la experiencia vivida son compartidos, discutidos, dramatizados en otros espacios familiares, comunitarios, religiosos, organizacionales.

La manera como se relata lo ocurrido y las acciones que se desarrollan posee profundas implicaciones para el abordaje de esta problemática, para los intereses de los grupos involucrados y las políticas sociales. Tanto en

el mercadeo como en el espacio político, las poblaciones afectadas directa o indirectamente se ven atrapados en la “venta” y manejo, en términos de *ratings*, de productos de tratamiento para víctimas de desastres, programas de intervención, traumas y héroes.

Los medios de comunicación son herramientas comunicacionales indispensables en situaciones de desastres, pues ofrecen servicios públicos vitales antes, durante y después de los desastres. Sin embargo, el tratamiento de las víctimas frecuentemente se ha caracterizado como explotador, intrusivo y hasta traumático. Las imágenes del desastre presentadas por los medios de comunicación son muchas veces exageradas, imprecisas y engañosas. Generalmente, los medios muestran a los individuos afectados por desastres como víctimas patéticas y llenas de pánico o como héroes; esto contrasta con la realidad de las víctimas de desastres, las cuales no son superhumanos y tampoco se encuentran completamente desamparados. Estas responden rápidamente con un afrontamiento activo.

De esta manera, se produce una fragmentación de los significados, que comienza por enfatizar lo inmediato por encima del “largo-plazo”, lo inusual sobre lo típico y lo personal e individual sobre lo social, lo que dificulta una evaluación comprensiva de las complejas y diferentes respuestas ante desastres y la mejor manera de afrontarlos (Echterling y Wylie, 1999).

De la misma manera, los líderes políticos muestran preocupación ante la opinión pública e informan de los programas puestos en marcha para atender a las víctimas de los desastres. No obstante, estos programas, como hemos visto, confrontan serias dificultades de comunicación, organización, competencia, capacitación y en general centran su atención en la cobertura de las necesidades básicas de los afectados, sin considerar el impacto psicosocial, ni las posibilidades organizacionales de las propias comunidades. El poder determina cómo se definen los problemas y cuáles soluciones son las más adecuadas a implementar, y los medios se encargan de reconocer, alertar, denunciar o escandalizar.

## RECONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN: EL DESAFÍO ÉTICO-POLÍTICO

Como vemos, la ayuda humanitaria y el apoyo psicosocial en emergencias tienen importantes implicaciones políticas. La consideración de los que “dan” y “reciben” el apoyo no puede llevarse a cabo al margen del contexto social, cultural, económico y político en el que ocurren.

La visión romántica de unidad que las sociedades muestran en tiempos de crisis no deben nublar las imágenes de permanente deterioro de la calidad de vida de las víctimas, sus relaciones y las comunidades. No podemos entender estos procesos y ayudar a los que los enfrentan sin tomar en cuenta estas problemáticas. La amplitud del sufrimiento humano y las políticas del trauma convocan a los profesionales a convertirse en abogados de las víctimas. Abogar significa hablar, interceder y argüir a favor de. Por esa razón los activistas comunitarios, los profesionales de la salud mental, académicos y/o investigadores, necesitamos hacer más que hablar por ellos, necesitamos hablar con ellos y ofrecer espacios para que se escuche su voz. En este contexto, el rol de la psicología es el de ofrecer una dimensión distinta a la ayuda humanitaria, que permita el diálogo con las comunidades afectadas en tanto sujetos activos del proceso que participan en la definición, ejecución y evaluación de los proyectos de intervención, apuntando a la reconstrucción del tejido social (Martín-Beristain, 1999). Podemos empoderar tanto a los que sufren como a los que ayudan.

De allí la importancia de una mayor comprensión y compromiso político, desde un papel más activo de los cooperantes y de los trabajadores de salud mental, como defensores de los derechos humanos y como elementos de presión en sus países de origen, a objeto de favorecer procesos de prevención. La prevención es una actividad política y pública. La responsabilidad de la actividad preventiva no es solo de aquellas instituciones que tienen el deber de definir políticas públicas, sino del compromiso de los trabajadores de la salud y otras disciplinas, que deben asumir este desafío ético-político (Lozada, 2000, 2001).

Esta responsabilidad nos exige reconocer que las posibilidades y límites de la reparación y recuperación no están solamente asociados con procesos psicológicos “internos” y con la interacción dinámica entre el impacto personal y colectivo, sino también están directamente vinculados con las condiciones materiales e históricas que hagan posible tal reconstrucción, en las cuales la experiencia del sujeto y la experiencia colectiva tienen un

sentido. El abordaje y búsqueda de soluciones a las problemáticas derivadas deberá, entonces, contemplar esta continuidad.

Una vez que ocurre un desastre es posible sembrar la semilla del empoderamiento, promoviendo un activismo constructivo que contribuya a mejorar los procesos políticos y el orden social existente. Los desastres pueden brindar una oportunidad para la participación ciudadana, constituir un desafío para el orden moral de la sociedad y sus referentes éticos, generando profundos cambios sociales, pero también estos pueden ofrecer una ocasión de ejercer presiones para lograr el consenso político y mantener el *statu quo* e incrementar aun más la polarización de comunidades y naciones.

Un desafío permanente es articular nuestras acciones de apoyo con programas con objetivos de incidencia estructural y construcción de ciudadanía. Se requiere fortalecer las redes de apoyo y grupos de acción que se crean y tratar que esta acción se expanda al ámbito público y sus niveles de decisión.

La reconstrucción es una tarea que demanda la vindicación de la dignidad de la población que ha sido marcada por las consecuencias de la tragedia y la confrontación de intereses políticos, económicos u otros. Es una labor que requiere el concurso de todas las instancias, de todos los sectores, en función de un objetivo común que recupere los referentes éticos, afectivos, individuales y colectivos y propicie el compromiso con la población afectada, fortaleciendo, al mismo tiempo, los procesos de construcción de ciudadanía. Lograrlo significa facilitar y promover la inclusión de todos los grupos sociales y posibilitar la participación requerida, sin instrumentalizarla, política o militar. En este contexto, el desafío ético y político está dirigido a asumir la tarea de la reconstrucción.

Como hemos dicho en otras oportunidades, la reconstrucción tiene rostro humano (Lozada y Rangel, 2001). No puede lograrse sin considerar la recuperación de los espacios familiares y comunitarios, ni al margen de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de las poblaciones víctima de las catástrofes. Estas poblaciones y su redes sociales de relación deben ser consideradas, y valoradas las posibilidades de acción y participación de dichas redes en los planes y proyectos de reconstrucción. La solidaridad y capacidad de afrontamiento mostrada por las comunidades, directa e indirectamente afectadas por las emergencias en Venezuela, nos ha

mostrado la capacidad de las redes tradicionales de apoyo como la familia, la comunidad y la escuela, fungiendo esta última como el eje integrador por excelencia.

En la labor de apoyo debemos reconocer estas redes de fortalecimiento mutuo, las cuales permiten afrontar el sentimiento de desarraigo y tristeza ocasionado por el desplazamiento de sus comunidades de origen, por la destrucción o fragmentación de vínculos familiares y sociales en general. Ello implica conocer cómo viven las personas, cómo encuentran sentido y responden a las experiencias traumáticas y, además, favorecer la comprensión del contexto social y cultural, de manera que se fortalezcan las posibilidades de respuesta personal y colectiva ya existentes. De allí la importancia del diálogo con las comunidades, del trabajo al lado de la gente, valorando sus conocimientos, historia y sus posibilidades para enfrentar estas situaciones, buscar soluciones y definir conjuntamente los objetivos y puesta en marcha de los proyectos emprendidos, vindicando su dignidad.

Asimismo, se requiere una revisión de los marcos normativos definidos por estos proyectos de intervención, los cuales proporcionan modelos de sociedad, de desarrollo, de salud-enfermedad, de abordaje y resolución de problemas, de plazos temporales y modos de afrontamiento, los cuales se corresponden con prioridades e intereses de instituciones, agencias u ONG nacionales e internacionales, que violentan patrones sociohistóricos, culturales y religiosos de las comunidades con las que se trabaja. Es también importante considerar diseños emergentes y el modelo de investigación-acción-participativa como estrategias metodológicas en el trabajo de apoyo psicosocial, que consideren junto a la incorporación activa de la gente la complejidad, movilidad y riqueza de los contextos donde se inscribe la acción humanitaria.

Las recomendaciones y propuestas, producto del balance de las experiencias, suponen un gran desafío: el desarrollo de proyectos de formación e investigación en el área de intervención psicosocial en emergencias, de evaluación y seguimiento de los proyectos y planes de acción, de programas de educación preventiva y creación de redes de apoyo, difusión e información. En fin, un trabajo urgente de prevención que incida sobre las causas y aminore el impacto de las catástrofes colectivas, especialmente sobre los sectores sociales más desfavorecidos, aquellos más frecuentemente afectados.

## REFERENCIAS

- Echterling, L. y Wylie, M. (1999). In the public arena: Disaster as a socially constructed problem. En R. Gist y B. Lubin (Eds.). *Reponse to disaster: Psychosocial, community, and ecological approaches* (pp. 327-346). USA: Taylor & Francis.
- Gist, R., Lubin, B. y Redburn, B. (1999). Psychosocial, ecological, and community perspectives on disaster reponse. En R. Gist y B. Lubin (Eds.). *Reponse to disaster: Psychosocial, community, and ecological approaches* (pp. 1-24). USA: Taylor & Francis,
- Kaniastry, K., y Norris, F. (1999). The experience of disaster: Individuals and communities sharing trauma. En R. Gist y B. Lubin (Eds.). *Reponse to disaster: Psychosocial, community, and ecological approaches* (pp. 25-62). USA: Taylor & Francis.
- Kilijanek, T. y Drabek, T.E. (1979). Assessing long-term impacts of a natural disaster: A focus on the elderly. *The Gerontologist*, 19, 555-566.
- Lozada, M. (2000). *Représentation professionnelle, engagement et action en situations d'urgence. Les dossiers des sciences de l'éducation. Représentations et engagements professionnels: des repères pour l'action*. Francia: Université de Toulouse.
- Lozada, M. (2001, julio). Un programa de intervención psicosocial en emergencias: la dimensión psicopolítica. Ponencia presentada en el 24 *Annual Scientific Meeting International Society of Political Psychology*, Cuernavaca, México.
- Lozada, M. y Rangel, A. (2001). Reconstruir desde la gente: la cuestión psicosocial. La experiencia venezolana. En: C. San Juan (Eds.). *Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento*. País Vasco: Icaria.
- Martín-Beristain, C. (1999). *Reconstruir el tejido social. Un enfoque crítico de la ayuda humanitaria*. Barcelona: Icaria.
- Martín-Beristain, C. (2000). *Apoyo psicosocial en catástrofes colectivas. De la prevención a la reconstrucción*. Caracas: Avespo-Comisión de Estudios de Postgrado, Universidad Central de Venezuela.
- Rangel, A. y Lozada, M. (2003). Intervención psicosocial en emergencias: experiencias y compromisos. Tragedia del estado Vargas 1999. Un compendio de trabajos que buscan entender. *Acta Científica Venezolana*, 54, 88-98.
- Steinglass, P. y Gerrity, E. (1990). Natural disasters and post-traumatic stress disorder: Short-term versus long-term recovery in two disaster-affected communities. *Journal of Applied Social Psychology*, 20, 1746-1765.
- Summerfield, D. y Hume, F. (1993). War and post-traumatic stress disorder: The question of social context. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 522-539.